

RESOLUCION No. 2 0 3 8

"POR EL CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

De conformidad con la Ley 99 de 1993, el Decreto 1608 de 1978, el Decreto 1594 de 1984, así como las disposiciones conferidas en el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto 109 de 2009 modificado por el decreto 175 de 2009, la Resolución 3691 del 13 de mayo de 2009 y,

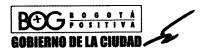
CONSIDERANDO

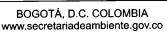
ANTECEDENTES

Que mediante acta A.I. 094 del 28 de Marzo de 2006, la Policía Ecológica de Bogotá, en la terminal de transportes de esta Ciudad, incautaron un (1) espécimen de la flora silvestre "ORQUIDEA" (CLATEYA TRIANAE) a la señora LUZ MARINA OSORIO, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 32.493.095 de Medellín, con domicilio en la carrera 96 B No. 42 A Sur 50 Conjunto El Pinar teléfono 4943454, Localidad de Kennedy de esta Ciudad, por carecer de salvoconducto que ampare su movilización.

Que con Memorando 2006SAS-SAS916 del 06 de Abril de 2006, la profesional Universitaria Grado XII del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR, remitió a la Subdirección Jurídica las actas que soportan la incautación antes detallada.

Que con oficio del 28 de Marzo del 2006, la profesional MARIA CLEMENCIA PULIDO, de la Oficina de Enlace en la Terminal de Transporte del entonces DAMA, entrego informe del decomiso de los especímenes de la flora silvestre, determinando (...) "con las Resolución 0213 y 801 de 1977 (dec), existen las vedas para









el aprovechamiento, transporte y comercialización de todas las especies conocidas como musgos, líquenes, lamas, parásitas, quiches, orquídeas así como lama, capote, broza y demás especies y productos herbáceos o leñosos que constituyen parte del hábitat de estas especies, (...)".

Que con Auto No. 0961 del 26 de Abril de 2006, la Subdirección Jurídica del antiguo DAMA, inició proceso sancionatorio contra la señora LUZ MARINA OSORIO, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 32.493.095 de Medellín, por la presunta infracción a lo preceptuado en le artículo 74 del Decreto 1791 de 1996 y la Resolución 438 de 2001.

Que en cumplimiento a lo determinado en el artículo segundo del citado acto administrativo, esté se fijo en lugar público de la entidad el 27 de Abril de 2006 y desfijo el 04 de Mayo de 2006.

Que mediante Auto No. 3283 del 07 de Diciembre de 2006, la Subdirección Jurídica del antiguo DAMA, formuló cargos a la señora LUZ MARINA OSORIO, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 32.493.095 de Medellín, por transportar una orquídea (Catleya Trianae), sin el respectivo salvoconducto, vulnerando con tal conducta los artículos 74 y 80 del Decreto 1791 de 1996.

Que con radicado 2007EE2497 del 31 de Enero de 2007, se citó a la señora LUZ MARINA OSORIO a fin de notificar el acto administrativo antes mencionado, con sello de la Administración Postal Nacional – ADPOSTAL del 06 de Febrero de 2007, obrante a folio 8 del expediente.

Que no obstante haberse intentado efectuar la notificación personal esta etapa procesar se surtió por EDICTO, con fijación del 22 de Marzo de 2007 y desfijación del 09 de Abril de 2007.

Que revisado el expediente DM-08-06-509, no se encontraron otras actuaciones inherentes a los hechos imputados.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Que de conformidad con las disposiciones Constitucionales en especial, las señaladas en el artículo 8º, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, en concordancia con el artículo 79







2038

Ibídem, que contempla el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y establece para el Estado, entre otros, el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 Constitucional, le asigna al Estado el imperativo de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, generando desarrollo sostenible, conservación y restauración o sustitución de estos. Atribuye también como responsabilidad estatal la prevención y control de agentes de deterioro ambiental, y que en cuyo caso, se configura la potestad sancionatoria como un mecanismo de protección frente al quebrantamiento de normas ambientales, y que consecuencialmente hace exigible el resarcimiento de los daños originados.

Que de acuerdo con las disposiciones Constitucionales, nace para el Estado, la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y la diversidad e integridad del ambiente, por cuanto, la carta política de Colombia, prevé el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos correspondiéndole naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que el artículo 6 del Decreto 1608 de 1978, dispone: (...) "De conformidad con el artículo 248 del Decreto - Ley 2811 de 1974, la fauna silvestre que se encuentran en el territorio nacional pertenece a la nación, (...)".

Que la Resolución 213 de 1977, en el artículo 1 prevé: (...) "Declárense plantase y productos protegidos, todas las especies conocidas en el artículo nacional con los nombres de musgos, líquenes, lamas, parásitos quiches, orquídeas así como la lama. (...)"

Que la Resolución Ibídem en los artículos 3 y 5 establece, la licencia previa para el aprovechamiento de estos productos y de salvoconducto para su movilización, al igual que prevé el decomiso del producto incautado.

Que el producto "Orquídea" (Catelya trianae), fue objeto de decomiso entendiéndose por tal la aprehensión material de este, por el incumplimiento de las disposiciones legales, siendo un producto declarado para su protección por parte de las autoridades ambientales.









Que el régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas el debido proceso, en virtud del cual, "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio", y el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que adicionalmente, dentro de las garantías constitucionales del debido proceso sancionador, cobran especial importancia los principios de igualdad, celeridad y caducidad de la acción, que imponen a la administración, el deber de actuar diligentemente y preservar las garantías de quienes resultan investigados; es así como, la caducidad tiene por objeto, fijar un límite en el tiempo para el ejercicio de ciertas acciones, en protección de la seguridad jurídica y el interés general.

Que en relación con la actuación ambiental surtida dentro del expediente DM-08-06-509, contra la señora LUZ MARINA OSORIO, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 32.493.095 de Medellín, esta Secretaría considera pertinente señalar lo dispuesto en el Parágrafo 3º del artículo 85 de la Ley 99 de 1993, en el que se estipula que:

"Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este artículo se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifique o sustituya."

Que el Decreto 1594 de 1984, define el proceso sancionatorio en los artículos 197 y siguientes, no obstante dicho régimen no contiene la figura de la caducidad administrativa, razón por la cual y, frente al vacío de la norma, nos remitimos a lo dispuesto en al artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, el cual establece que: "Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas.".

Que sobre esta materia, vale la pena recalcar la posición del H. Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 4438, MP. Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, frente a la caducidad relacionada con el hecho puntual en el tiempo y el transcurso del mismo por más de los tres (3) años a que se refiere el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:







2038

(...) "Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de consideraciones que no sean solo el transcurso del tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la Ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable, debe interpretarse que teniendo en cuenta las normas que dicta el Legislador deben producir los efectos en ellas previstos, y en tal sentido, cuando se hace referencia a la caducidad de la acción prevé el ejercicio de la autoridad administrativa en la medida que también produzca efectos en derecho, es decir, mediante la expedición dentro del término de tres años previsto de manera general en la norma " (...).

Que al respecto, el H. Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, donde se precisó:

"(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, por lo tanto el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor." (...) (Negrilla y subrayado fuera del texto original).

Que respecto al término establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente: (...) "Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: " (...) *Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa6..." (Subrayado fuera de texto).

Que así las cosas y, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo y, las instrucciones impartidas a través de la



PBX: 444 1030







AMBIENETE 2038

Directiva No. 007 de 2007 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se deduce que la administración, para el caso en concreto, disponía de un término de tres (3) años contados a partir de la fecha en que la administración conoció los hechos que dieron origen a la presente actuación esto es, desde el 28 de Marzo de 2006, para la expedición del acto administrativo de sanción, su notificación y debida ejecutoria, trámite que no se surtió, operando de esta manera el fenómeno de la caducidad.

Que, siendo la caducidad, una institución de orden público, a través de la cual el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda, que su declaración proceda de oficio, por cuanto, al continuar el proceso, este culminaría con un acto viciado de nulidad, por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite.

Que en igual sentido, el Doctrinante Luis Alfonso Acevedo Prada, en su obra "Caducidad, Prescripción, Perención, Preclusión y Términos" Primera Edición 2004, expreso al respecto de la caducidad lo siguiente:

(...)" Ahora bien, en la caducidad ocurre que proceden sus efectos ope legis o de pleno derecho, sin necesidad de que el interesado en beneficio de sus efectos la alegue o proponga como defensa exceptiva. El funcionario competente en el juzgamiento pertinente, no solo debe sino que esta obligado a declararla sin necesidad de petición de parte" (...).

Que a través del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se modificó la Estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, a la que se le asignó entre otras funciones, la de ejecutar el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales, e implementar las acciones de policía que sean pertinentes para el efecto.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109 de 2009 el cual fue modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio del cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital De Ambiente, y la Resolución 3691 del 13 de Mayo de 2009, la cual en su literal b), establece que corresponde al Director de Control Ambiental expedir todos los Actos Administrativos que decidan solicitudes y trámites ambientales de competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente.







En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria del Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente - DAMA, hoy Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, en contra de la señora LUZ MARINA OSORIO identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 32.493.095 de Medellín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las presentes diligencias, como consecuencia de lo previsto en el artículo primero de la presente providencia.

ARTICULO TERCERO: Ordenar el decomiso definitivo a favor de la nación, del espécimen de la Flora Silvestre ORQUIDEA (CLATEYA TRIANAE), con fundamento a lo determinado en la parte motiva de esta providencia.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora LUZ MARINA OSORIO, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 32.493.095 de Medellín, en la carrera 96B No. 42 A Sur — 50 Conjunto El Pinar teléfono 4943454 Localidad de Kennedy del Distrito Capital.

ARTICULO QUINTO: Publicar la presente providencia en el boletín de la entidad y fijarla en lugar público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTICULO SEXTO: Una vez ejecutoriada, enviar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, a la Subdirección Financiera y a la Subsecretaría General y de Control Disciplinario, de la Secretaría Distrital de Ambiente para lo de su competencia.





BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA www.secretariadeambiente.gov.co





2038

ARTICULO SEPTIMO: C ontra la presente providencia no procede recurso alguno conforme lo establecido en el Artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los 0 1 MAR 2010



EDGAR FERNANDO ERAZO CAMACHO

Director de Control Ambiental

PROYECTÓ.- ISABEL TRUJILLO SARMIENTO REVISÓ.- DR. OSCAR TOLOSA EXPEDIENTE DM-08-06-509



